

*0000016

*Comisión De Pueblos Indígenas
Congreso De La República
Guatemala C.A.*

23 de Mayo de 2013
Of.CM/007-2013

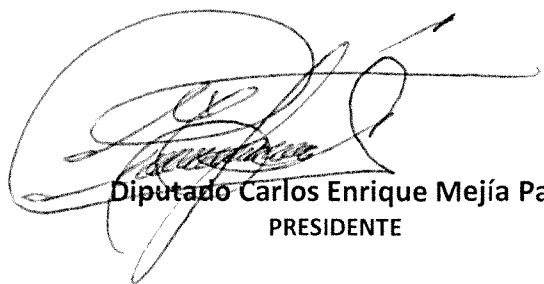
Licenciada
Ester Velásquez Sagastume
Directora
Dirección Legislativa
Congreso de la República

Respetable Señora Directora:

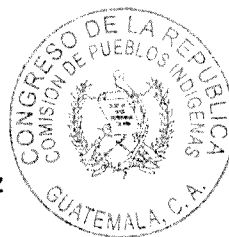
Al saludarla me permito remitirle el **DICTAMEN FAVORABLE** de la iniciativa número 3946 "Ley de Jurisdicción Indígena", en original (24 hojas membretadas de la Comisión de Pueblos Indígenas tamaño carta) así como un CD conteniendo la misma información; solicitando la continuidad del trámite correspondiente.

Al agradecer su atención, me despido con muestra de estima.

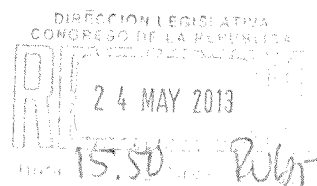
Atentamente,



Diputado Carlos Enrique Mejía Paz
PRESIDENTE



CM/mlmp





0000017

***Comisión De Pueblos Indígenas
Congreso De La República
Guatemala C.A.***

DICTAMEN No. ____-2013

INICIATIVA 3946

LEY DE JURISDICCIÓN INDÍGENA

ANTECEDENTES

La iniciativa 3946 que pretende la creación de la Ley de Jurisdicción Indígena, fue presentada el 21 de octubre de 2008 y conocida por el Pleno del Congreso de la República el 22 de octubre del mismo año, esta iniciativa fue presentada por los representantes Rosa Elvira Zapeta Osorio, Beatriz Canastuj, Mirza Arreaga, Thelma Ramírez, Manuel García Chutá, Otilia Lux, Maura Estrada y Compañeros.

Es importante destacar que en los archivos del Congreso de la República no consta ningún antecedente de iniciativa de ley en este sentido.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa bajo estudio y análisis está compuesta por 23 artículos divididos en cinco capítulos que contemplan las disposiciones generales de la ley, dentro de los cuales se encuentran el objeto de la Ley, principios, definiciones naturaleza. De la misma forma, la iniciativa está compuesta por tres capítulos más, relativos a la jurisdicción indígena, su competencia y relaciones de coordinación respectivamente.



• 000018

***Comisión De Pueblos Indígenas
Congreso De La República
Guatemala C.A.***

La iniciativa de ley pretende la instauración de la jurisdicción indígena como la potestad de los pueblos indígenas de actuar mediante sus propias tradiciones indígenas e instancias, sustentada en el respeto a las costumbres y tradiciones propias de la comunidad para solucionar de forma definitiva las controversias que se susciten dentro de ésta, legitimar actos y tomar decisiones de acuerdo a su propio derecho y cultura.

**DE LAS CONSIDERACIONES DE ORDEN
CONSTITUCIONAL Y LEGAL**

Al dar lectura a la Constitución Política de la República de Guatemala, se encuentra ya con cierto grado de contundencia la caracterización del Estado pluriétnico. En su artículo 58, relativo a la identidad cultural *“reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres”*. En su artículo 66 reza que *“Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos”*. Este postulado indica el carácter multiétnico del Estado, y al estar establecido en la parte dogmática de la Constitución, debe entenderse como verdad jurídica incuestionable o verdad jurídica dogmática, puesto que la parte dogmática de la Constitución es la que determina el orden ideológico y filosófico sobre los cuales descansa el andamiaje del Estado.



000019

***Comisión De Pueblos Indígenas
Congreso De La República
Guatemala C.A.***

El artículo 66 es de especial importancia en el reconocimiento de la multiétnicidad del país puesto que es mandato constitucional. En ese sentido el imperativo constitucional elimina toda duda de la existencia de los pueblos mayas en el territorio e indica que nuevamente se está frente a una verdad jurídica dogmática por lo que sin vacilaciones la Constitución debe cumplirse en tales mandatos, al obligarse el Estado *a reconocer, respetar y promover “formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos”*. Toda vez que el postulado constitucional determina que el Estado reconoce sus obligaciones frente a la organización social, de los pueblos y etnias de origen maya, también reconoce y respeta el orden jurídico indígena maya, y con ello la obligatoriedad que tiene el Estado, frente al sistema jurídico de estos pueblos y etnias el cual descansa en su organización social la cual responde a un conjunto de autoridades. Por lo tanto a eso se le denomina sistema jurídico tal y como se ha analizado según los avances de la antropología jurídica y las percepciones universales del qué hacer jurídico.

Sin olvidar las categorías de nuestra actual Constitución, el respeto y promoción sin subordinación de las bases primeras para lograr un Estado que responda a la realidad social y a las más profundas aspiraciones de los pueblos que lo componen, el pleno reconocimiento de los derechos culturales pasa por el reconocimiento a la pluralidad jurídica, que implica el respeto al sistema jurídico propio de los pueblos indígenas que coexisten en Guatemala; el respeto al ejercicio de la autoridad en función de la participación política e impartición de justicia según los propios postulados culturales; el respeto a las características



000020

***Comisión De Pueblos Indígenas
Congreso De La República
Guatemala C.A.***

culturales de todo ciudadano sujeto a procesos judiciales considerando las distintas posibilidades del respeto a su cultura como ciudadano guatemalteco, como actor o como demandado. Permitir a los pueblos indígenas, en el marco del estado plural, ejercer con plenitud los derechos que le son inherentes, es fortalecer el ejercicio de la ciudadanía, consecuentemente, todo ello, es hacer Estado.

La Constitución Política de la República de Guatemala, como norma general y fundamental de la organización jurídica de un país su basamento esencial lo enriquece con el reconocimiento más que nada de la existencia, validez y utilidad del Derecho Indígena y eso es lo que se pretende con la Ley de Jurisdicción Indígena. En ese sentido la Jurisprudencia Constitucional, ha sido bastión para entender los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. Así se redacta en la opinión de fecha 18 de mayo de 1995 dentro del expediente 199-95, Gaceta Jurisprudencial número 37 de Opiniones Consultivas de la Corte de Constitucionalidad, relativo al Convenio 169 de la OIT y que con claridad aborda lo relativo a esa materia. De manera preliminar puede afirmarse que el Convenio 169 de la OIT, en su conjunto, no contraviene la Constitución, ya que no regula ninguna materia que colisione con la ley fundamental sino que, al contrario, trata aspectos que han sido considerados constitucionalmente como llamados a desarrollarse a través de la legislación ordinaria.

Se dice en la opinión consultiva del expediente 199-95: *El artículo 8 del Convenio establece que se debe tomar en consideración el derecho consuetudinario de los pueblos a conservar sus costumbres e instituciones propias "siempre que éstas no*



000021

Comisión De Pueblos Indígenas
Congreso De La República
Guatemala C.A.

sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos", es decir, no existe incompatibilidad con la Constitución. El artículo 9 también contiene una norma en el mismo sentido, al establecer que "en la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional se respetarán los métodos que estos pueblos utilicen para la represión de los delitos". Como puede observarse, los artículos 8 y 9 al señalar la aplicación del derecho consuetudinario lo hacen siempre dentro del marco del derecho existente en el país de que se trate; así, el artículo 8 al señalar que al aplicar el derecho a los pueblos interesados deberán tomarse en consideración sus costumbres o derecho consuetudinario, no establece que se juzgará con base en esas costumbres, sino que se tomarán en consideración éstas al momento de juzgar. El artículo 9 al indicar que deberán respetarse los métodos que los pueblos utilicen para la represión de los delitos prevé que esto será en la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional, y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, por lo que si estos métodos los contrarían no serán aplicables. En lo que respecta al artículo 10, al establecer que "deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento", al imponérselas a los miembros de los pueblos indígenas, debe entenderse también que se refiere a tipos de sanción distintos, contemplados dentro de la legislación. Así puede mencionarse que en muchas comunidades no se utiliza como sanción de un delito la cárcel sino medidas reparatoras del daño, por lo que si estos mecanismos han sido eficaces en ciertas comunidades podrían introducirse en la legislación para que se apliquen a esos grupos indígenas; sin embargo, de no existir tipos de sanción diferentes del encarcelamiento deberá aplicarse éste, pero al haber incorporado dentro de la



000022

Comisión De Pueblos Indígenas
Congreso De La República
Guatemala C.A.

legislación otras sanciones diferentes al encarcelamiento deberá darse preferencia a las mismas. De ninguna manera, podría pretenderse su aplicación, si no existieran en la legislación. Se ha argumentado que la sanción diferente a los miembros de los pueblos indígenas, así como otras disposiciones del Convenio, vulneran el derecho de igualdad reconocido constitucionalmente. Esta Corte ha considerado en casos anteriores, que el derecho de igualdad enunciado en el artículo 4 de la Constitución, se traduce en que las personas que se encuentran en determinada situación jurídica, tengan la posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos derechos y contraer obligaciones (...) este principio se refiere a que no debe darse un tratamiento jurídico disímil a situaciones de hecho idénticas; de ahí que la garantía de igualdad no se opone a que el legislador contemple la necesidad o conveniencia de clasificar y diferenciar situaciones distintas de darles un tratamiento diverso, siempre que tal diferencia tenga una justificación razonable dentro del sistema de valores que la Constitución consagra (...) la ley debe tratar de igual manera a los iguales en iguales circunstancias; sin embargo, en el caso de variar las circunstancias, de ser desiguales los sujetos o de estar en desigualdad de condiciones, han de ser tratados en forma desigual... (Sentencia de esta Corte del doce de enero de mil novecientos noventa y cinco, dictada dentro del expediente número quinientos treinta y siete guión noventa y tres). En consecuencia, al encontrarse los sujetos que integran un pueblo en desiguales circunstancias que los que forman otros sectores de la sociedad pueden ser tratados en forma diferente, sin que ello viole el artículo 4. de la Constitución."



000023

*Comisión De Pueblos Indígenas
Congreso De La República
Guatemala C.A.*

El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ha sido ratificado por el Estado de Guatemala y aporta significativamente al orden jurídico nacional en materia de Pueblos Indígenas. Sin embargo, y considerando que si bien es cierto que las reglas del juego democrático son formalmente iguales para todos, existe una evidente desigualdad real de los pueblos indígenas con relación a otros sectores de los habitantes del país, por lo cual el Convenio se diseñó como un mecanismo jurídico especialmente dirigido a remover parte de los obstáculos que impiden a estos pueblos el goce real y efectivo de los derechos humanos fundamentales, para que por lo menos los disfruten en el mismo grado de igualdad que los demás integrantes de la sociedad. Guatemala es reconocida y caracterizado ya como un Estado unitario, multiétnico, pluricultural y multilingüe, conformada, esa unidad, dentro de la integridad territorial y las diversas expresiones socio-culturales de los pueblos indígenas, los que aún mantienen la cohesión de su identidad, especialmente los de ascendencia Maya, en consecuencia, hoy la Constitución Política de la República de Guatemala, sirve de vehículo determinante para otorgar la validez requerida por el Derecho Indígena para su aceptación y ejercicio en la comunidad indígena de ascendencia maya.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

La suma de los distintos momentos históricos que Guatemala ha vivido, dan como resultado la consolidación de un Estado etnocéntrico. La definición de un Estado etnocéntrico responde a la visión que tiene en éste sólo el grupo culturalmente



000024

***Comisión De Pueblos Indígenas
Congreso De La República
Guatemala C.A.***

definido como igual y que frente a los otros grupos étnicos se ve a sí mismo como superior, condición que también determina su superioridad en todo el ordenamiento jurídico que garantiza ese estatus impuesto. Con razón, en el año 2000, Rodolfo Stavenhagen dijo que *“en América latina la subordinación de los pueblos indígenas al Estado colonial, primero, y a las repúblicas independientes, después modificaron profundamente las estructuras sociales y las características culturales incluyendo por supuesto las costumbres jurídicas... Una forma de violación de derechos humanos indígenas es la negación, por parte del Estado y la sociedad dominante, de sus costumbres jurídicas la cual conduce a la negación de algunos de los derechos individuales contenidos en los instrumentos internacionales vigentes”*. Sin embargo aun cuando esa ha sido la cotidianidad en Guatemala, también es cierto que se han dado pasos para el reconocimiento de la pluralidad al momento de reconocer la nación como pluricultural, multilingüe y multiétnica.

En virtud del proceso de invisibilización aplicado contra los pueblos indígenas, especialmente en su calidad de sujetos de derecho y su identificación como meros sujetos sociales se hace imprescindible generar condiciones jurídicas y políticas que garanticen la conquista del estatus legal de los sujetos ahora de derechos, en base a la legislación constitucional vigente y la legislación internacional, complementaria. De allí que en Guatemala existan dos normativas sociales y jurídicas, dos sistemas para un orden social nacional lo que los acuerdos de paz denominan: Sistema Nacional de Justicia, el Derecho Indígena Maya, mal llamado Derecho consuetudinario Indígena y el Sistema jurídico nacional vigente guatemalteco, ambos con sus propias construcciones filosóficas pero en diferentes



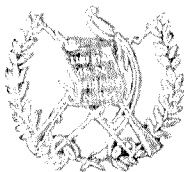
000025

***Comisión De Pueblos Indígenas
Congreso De La República
Guatemala C.A.***

posiciones. Uno, el sistema jurídico indígena maya, en una situación de subordinación frente al sistema jurídico oficial que se encuentra en una situación de dominio en virtud de su oficialidad legal y entonces se convierte en excluyente en cuanto a la validez dentro y frente al Estado. La práctica cotidiana del Derecho Maya en las comunidades Indígenas del país muestra la existencia de todos los elementos necesarios para reconocer que se está frente a un sistema jurídico con estructura propia. Es un sistema jurídico porque contiene un conjunto de normas vinculadas lógicamente entre sí que surgen de la necesidad de establecer un orden social y de regular la conducta humana en el marco de las relaciones sociales en base a ciertos principios: conciliador, reparador, didáctico, dinámico, legítimo, oral.

El propósito de la iniciativa bajo estudio y análisis es fortalecer el sistema jurídico propio de los pueblos indígenas y los avances de la jurisprudencia guatemalteca en esa materia. El desafío es definir una normativa de jerarquía ordinaria para que legisle el ejercicio pleno de la jurisdicción indígena especial dentro del Estado sin olvidar las categorías constitucionales referentes al respeto y promoción sin subordinación de las bases primeras para lograr un Estado que responda a la realidad social y a las más profundas aspiraciones de los pueblos que lo componen.

El pleno reconocimiento de los derechos culturales pasa por el reconocimiento a la pluralidad jurídica, que implica el respeto al sistema jurídico propio de los pueblos indígenas que coexisten en Guatemala; el respeto al ejercicio de la autoridad en función de la participación política e impartición de justicia según los propios



000026

***Comisión De Pueblos Indígenas
Congreso De La República
Guatemala C.A.***

postulados culturales; el respeto a las características culturales de todo ciudadano sujeto a procesos judiciales considerando las distintas posibilidades del respeto a su cultura como ciudadano guatemalteco, como actor o como demandado. Permitir a los pueblos indígenas, en el marco del estado plural, ejercer con plenitud los derechos que le son inherentes, es fortalecer el ejercicio de la ciudadanía, consecuentemente, todo ello, es hacer Estado.

Tal como se ha explicado, en el sistema jurídico vigente en Guatemala, la autoridad de las comunidades del pueblo maya es aceptada y reconocida. La única forma de no aceptarla sería si lo resuelto viola los derechos humanos, ya que éstos son universales y no puede subsistir hoy, un ordenamiento contrario a dichos principios.

Es decir que en materia legislativa, el Estado de Guatemala ha reconocido, mediante los distintos instrumentos, además de las convenciones internacionales ratificadas por el Estado que se convierten en normativa interna, el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas; no obstante hace falta avanzar en materializar el respeto y ejercicio de esos derechos ya reconocidos en variados instrumentos jurídicos, lo cual le da relevancia particular a la construcción de un Estado pluricultural que apenas empieza a dar sus primeros pasos en medio de esa carga ideológica racista y etnocentrista que aún persiste en el país y en ese sentido para superar los vacíos, es fundamental la ley de jurisdicción indígena.

En virtud de la anterior, cómo debemos leer una aparente contradicción del texto constitucional por el contenido del artículo 203 donde reza: "*La función*



Comisión De Pueblos Indígenas
Congreso De La República
Guatemala C.A.

000027

jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.” Si analizamos el artículo completo en función al contenido de los artículos 66, 58 y 44 de la parte dogmática de la Constitución, daremos vida a la interpretación armónica de la Constitución, como lo dice la Corte de Constitucionalidad, considerando que el Art. 203 forma parte del apartado orgánico de nuestra carta magna, debe interpretarse en función de los mandatos dogmáticos previos y no viceversa. “*La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República*” reza el artículo constitucional, en el marco del cumplimiento de este postulado debemos reconocer que toda autoridad judicial indígena dentro de su sistema o dentro del sistema jurídico oficial debe cumplir con la Constitución, tal es el caso de los pueblos indígenas que al administrar justicia se amparan en lo que para el efecto rezan los artículos 66 y 58 como lo hemos analizado ya y las leyes de la República a que hace referencia el planteamiento son para el tema específico, el Convenio 169 de OIT ratificado y vigente en Guatemala.

El texto constitucional del Art. 203 se refiere a los tribunales de la Corte Suprema de Justicia identificados en la ley del Organismo Judicial y los que toman vida a partir del reconocimiento que hace el Estado, vía el Art. 66 y el derecho inherente, contenido según el Art. 44 y también vía el Art. 46 de la Constitución Política de la República y el Convenio 169 de OIT, en el ejercicio del sistema jurídico indígena llamado legalmente Derecho Consuetudinario indígena. *La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.* Este precepto constitucional determina con claridad la función jurisdiccional según la acepción de



000028

***Comisión De Pueblos Indígenas
Congreso De La República
Guatemala C.A.***

esta categoría, *"donde hay un proceso e interviene un Juez, como órgano imparcial e institucionalmente indiferente del efecto jurídico, allí hay jurisdicción entendida como la actividad dirigida a la realización del ordenamiento jurídico, y consiste preferentemente en la aplicación del derecho objetivo,(conjunto de normas vigentes) a un caso concreto"*¹.

El ejercicio de los Sistemas Jurídicos Indígenas a través de sus autoridades, no lesiona este principio constitucional puesto que de la misma manera funciona el ejercicio de la jurisdicción voluntaria abundantemente desarrollado en nuestra legislación en donde pareciera que el notario es juez y parte al ejercer jurisdicción, al igual que el juez laboral o el árbitro también ejerce jurisdicción, en ese sentido vemos con claridad que la jurisdicción no se pierde ni se comparte, sino que el Estado la delega, por expresa designación legal. En el caso del texto constitucional debe entenderse que la función jurisdicción recae sobre la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales, nos podemos preguntar ¿cuales otros?, el texto señala que los que la ley establezca, y ¿cuales ha establecido la ley?, pues la Constitución en su parte dogmática establece el reconocimiento, respeto y promoción de las formas de organización de los pueblos indígenas, por consiguiente reconoce sus autoridades. Además en el Convenio 169 de OIT al reconocer el sistema jurídico indígena o derecho consuetudinario, se está reconociendo otros tribunales y/o otros jueces o autoridades encargadas de administrar justicia, la misma Corte de Constitucionalidad en su opinión consultiva sobre el Convenio 169 de OIT, establece que, *"Esta Corte es del criterio que el Convenio 169 analizado no contradice lo dispuesto en la Constitución, y es un*

¹ Rosenberg, Tratado de Derecho Civil, citado por Serra Domínguez Manuel, Estudios de Derecho procesal. Ediciones Ariel Barcelona.



000029

***Comisión De Pueblos Indígenas
Congreso De La República
Guatemala C.A.***

instrumento jurídico internacional complementario, que viene a desarrollar las disposiciones programáticas de los artículos 66,67,68 y 69 de la misma, lo que no se opone, sino que, por el contrario, tiende a consolidar el sistema de valores que proclama el texto constitucional.”

Además de lo considerado anteriormente esta Comisión de Trabajo considera de vital importancia responder el ¿Por qué se hace necesaria la Ley de Jurisdicción Indígena?, a criterio de de esta Comisión de Trabajo, es indispensable para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho que exista en la legislación ordinaria necesaria que de vida plena al orden constitucional y en ese sentido haga avanzar al Estado y ponerlo a tono con la naturaleza de la nación guatemalteca y en tanto hasta ahora, la legislación no responde a las aspiraciones de los pueblos que la conforman, fundamentalmente en lo relativo a sus derechos. Es fundamental, porque tiene en cuenta el respeto a las diferencias comprendiendo que estas constituyen una fortaleza y no la causa, que se arguye, de las desigualdades.

En Guatemala, las aspiraciones de los pueblos indígenas es darle vida a la utopía del contrato social, construir imaginariamente un solo techo, que es el Estado, debajo del cual todos los pueblos puedan disfrutar en igualdad de condiciones del derecho a ejercer su cultura en todas sus dimensiones. La legalidad para ello es solo el instrumento.

En el marco de la modernidad, Guatemala debe surgir sociopolíticamente como un Estado de derecho pluricultural en busca de la interculturalidad basada en la



000030

***Comisión De Pueblos Indígenas
Congreso De La República
Guatemala C.A.***

exigencia de que todas la funciones estatales, incluyendo la administración pública, se derivan de una norma legal, que incluya todas las distintas manifestaciones culturales y el respeto a los derechos inherentes a la persona y a las colectividades. Toda la estructura estatal se legitima exclusivamente por el procedimiento formal democrático cuyo núcleo es la legislación, que debe permitir el debido y adecuado proceso de transformación de la sociedad excluyente hacia la transición de una democracia intercultural, es decir avanzar de la multiculturalidad hacia la pluralidad.

Permitir a los pueblos indígenas, en el marco del estado plural, ejercer con plenitud los derechos que le son inherentes, es fortalecer el ejercicio de la ciudadanía, consecuentemente, todo ello, es hacer Estado. La configuración del imaginario guatemalteco debe ser el producto de los consensos sociales. Debe ser el resultado de los acuerdos entre los pueblos con sus propias conciencias culturales. El proceso de construcción de la nación guatemalteca, en el marco de la diversidad, marcará el estadio humano a alcanzar. Este es un reto de capital importancia para Guatemala en la construcción de la interculturalidad. El reconocimiento, el respeto y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas en un Estado intercultural es la garantía de la cohesión de la nación guatemalteca y a eso contribuirá la Ley de Jurisdicción Indígena.

La conflictividad social en sus expresiones de delincuencia común, así como otras dimensiones de conflictividad no se ven atacadas frontalmente como esperaríamos los ciudadanos, en consecuencia, la aplicación permanente y cotidiana del sistema jurídico indígena en la actualidad e históricamente ha



* 000031

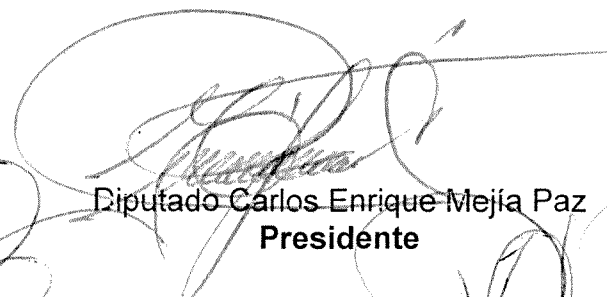
***Comisión De Pueblos Indígenas
Congreso De La República
Guatemala C.A.***

garantizado que esa conflictividad no se prolongue ni se extienda así como también garantiza que no se multiplique ni se agudice, es evidente las estadísticas que con contundencia demuestran que donde hay autoridades indígenas se reduce la criminalidad y se fortalecen los mecanismos de cohesión social. Casos como Totonicapán y Sololá son espacios de población donde la criminalidad casi está controlada, aun con las serias ausencias de la institucionalidad del estado o del organismo judicial.

DICTAMEN

En base a las consideraciones Constitucionales, Legales y Políticas vertidas anteriormente, esta Comisión emite **DICTAMEN FAVORABLE** a la iniciativa 3946 que pretende aprobar Ley de Jurisdicción Indígena, por ser un Proyecto de Decreto constitucional, oportuno y conveniente.

DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 17 DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.


**Diputado Carlos Enrique Mejía Paz
Presidente**



**Diputado Gregorio Luciano Nolasco Marcelino
Vicepresidente**


**Diputada Alicia Dolores Beltrán López
Secretaria**

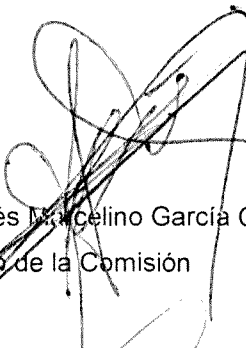


000032

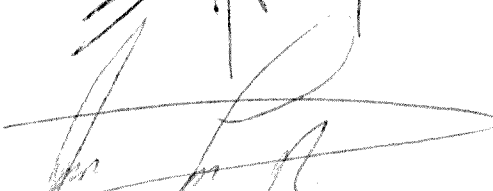
**Comisión De Pueblos Indígenas
Congreso De La República
Guatemala C.A.**

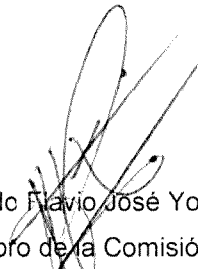

Diputado Eugenio Moisés González Alvarado
Miembro de la Comisión

Diputado Selvin Boanerges García Velásquez
Miembro de la Comisión


Diputado Moisés Marcelino García Chutá
Miembro de la Comisión

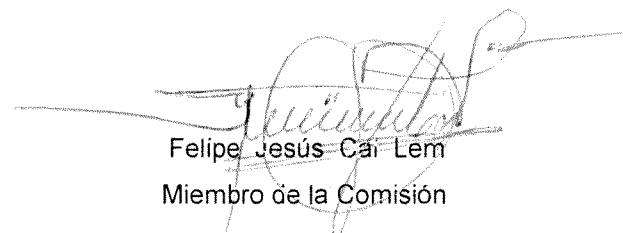

Diputado Jimmy Ronald Ren Ixcamparij
Miembro de la Comisión


Diputado Abraham Ermitanio Roblero
Miembro de la Comisión


Diputado Flavio José Yojcom
Miembro de la Comisión


Diputado Amílcar de Jesús Pop Ac
Miembro de la Comisión

Diputado Edgar Ajcip Tepeu
Miembro de la Comisión


Felipe Jesús Car Lem
Miembro de la Comisión





000033

*Comisión De Pueblos Indígenas
Congreso De La República
Guatemala C.A.*

DECRETO NÚMERO _____

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que el Estado de Guatemala tiene dentro de sus fines la protección de la persona humana y asimismo, reconoce, respeta y promueve las formas de vida, costumbres y formas de organización social de los pueblos indígenas que incluye su estructura jurídica y política para la práctica de sus costumbres y el ejercicio de su cultura milenaria.

CONSIDERANDO:

Que mediante la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países independientes, el Estado de Guatemala se obligó a promulgar las normas necesarias para dar cumplimiento y debida vigencia a los principios del derecho internacional relativos a los derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente lo relacionado con sus instituciones propias.

CONSEDERANDO:

Que la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada por la Organización de las Naciones Unidas planteó que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas y jurídicas.

CONSIDERANDO:

Que el Acuerdo sobre identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas establece que la normatividad tradicional de los pueblos indígenas ha sido y sigue siendo un elemento esencial para la regulación social de la vida de las comunidades.



000034

Comisión De Pueblos Indígenas
Congreso De La República
Guatemala C.A.
CONSIDERANDO:

Que es necesaria la promulgación de una ley que garantice y facilite la noble función de las autoridades indígenas tradicionales y su sistema jurídico e instituciones para la convivencia ordenada de acuerdo con sus ancestrales modos de vida.

POR TANTO:

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 171 inciso a) de la Constitución Política de la República de Guatemala,

DECRETA:

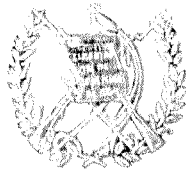
La siguiente:

LEY DE JURISDICCIÓN INDÍGENA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENRALES

Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto desarrollar las garantías y principios constitucionales de respeto y ejercicio del derecho de los pueblos indígenas de ejercer y aplicar su propio sistema jurídico delegado en las autoridades tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 2. Naturaleza. La presente ley es de naturaleza de derecho público y de aplicación general.

Artículo 3. Ámbito de Aplicación. El imperio de la presente ley se extiende a todo el territorio del país, y a toda persona nacional o extranjera, residente en



000035

Comisión De Pueblos Indígenas
Congreso De La República
Guatemala C.A.

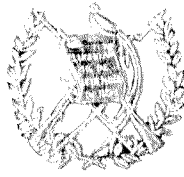
tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas y ratificadas por Guatemala.

Artículo 4. Principios: Son principios que rigen la presente ley:

- a) Unidad del Estado, el respeto a la integridad y unidad en la diversidad.
- b) Legalidad, respeto y desarrollo de los derechos y garantías constitucionales.
- c) Pluralismo jurídico, ejercicio y respeto a los distintos sistemas normativos y visiones de cada pueblo reconocidos en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.
- d) Solidaridad, la cooperación mutua entre los pueblos y personas.
- e) Equidad de género, el respeto a la igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos.
- f) Multiculturalidad e interculturalidad, el respeto, conocimiento y convivencia armónica en la práctica de las distintas culturas del país.

Artículo 5. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entenderá como:

- a. **Derecho Consuetudinario.** Es el sistema jurídico indígena que constituye el conjunto de valores, principios, normas, autoridades, instituciones y procedimientos que se observan en la aplicación de justicia; se fundamenta en la cosmovisión practicada de generación en generación por dichos pueblos.
- b. **Jurisdicción Indígena.** Es la potestad legal de las autoridades indígenas de administrar justicia en todos los ámbitos del derecho, de acuerdo al conjunto de principios, valores, usos y costumbres, que desarrollan los pueblos indígenas en el marco de su organización social.
- c. **Pueblos Indígenas.** Son los pueblos originarios del territorio nacional, que descenden de las poblaciones que habitaban antes del año 1524 y del



000036

Comisión De Pueblos Indígenas
Congreso De La República
Guatemala C.A.

establecimiento del Estado y sus actuales fronteras y que, cualquiera sea su situación jurídica, conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Para los efectos de la presente ley, al hacer referencia a pueblos indígenas se incluye al pueblo garífuna.

- d. Autoridades Indígenas.** Se considera autoridades indígenas tradicionales a las personas individuales o colectivas que cada pueblo o comunidad indígena establece y designa según sus propios principios, normas y procedimientos para las funciones que dichos pueblos definen.

Artículo 6. El derecho al propio derecho. El estado reconoce la potestad de los pueblos y comunidades indígenas de tener su propio derecho, administración de justicia y autoridades dentro de su territorio, de acuerdo a su cultura y necesidades sociales, con observancia de los derechos humanos.

CAPITULO II
JURISDICCION INDÍGENA

Artículo 7. De la Jurisdicción Indígena. La Jurisdicción indígena es la potestad de los pueblos indígenas de actuar mediante sus propias autoridades indígenas tradicionales e instancias, sustentado en el respeto a las costumbres y tradiciones propias de la comunidad para solucionar de forma definitiva las controversias que se susciten dentro de ésta, legitimar actos y tomar decisiones de acuerdo a su propio derecho y cultura. La aplicación de la jurisdicción indígena estará condicionada a que con ella no se contravenga ninguna norma constitucional, ni se trasgredan derechos humanos de las partes o de terceros.

Artículo 8. Carácter y eficacia de las decisiones. Las decisiones de la jurisdicción indígena son de cumplimiento obligatorio y constituyen cosa juzgada. Tienen además, carácter vinculante, validez legal, eficacia y efectos en el ámbito



000037

Comisión De Pueblos Indígenas
Congreso De La República
Guatemala C.A.

que corresponda según su contenido. Las partes y las instituciones del Estado están obligadas a respetar y a acatar dichas decisiones.

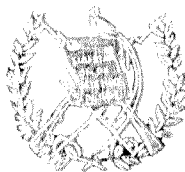
Artículo 9. Principios de la jurisdicción. La jurisdicción indígena se basa en los principios de diálogo, consulta, consenso y los demás usos y costumbres de cada pueblo y comunidad indígena.

Artículo 10. Documentos. Todos los documentos y decisiones que emita la autoridad indígena en el ejercicio de su cargo, dan fe y hacen plena prueba de los hechos que contengan.

CAPITULO III
COMPETENCIA

Artículo 11 Competencia de la jurisdicción indígena. La jurisdicción indígena comprende las siguientes competencias:

- a. Competencia territorial:** Las autoridades indígenas tienen competencia para conocer de los hechos y actos que ocurren dentro de su territorio. La competencia territorial faculta a las autoridades para conocer de los hechos, casos, situaciones o relaciones conflictivas que se dan dentro del ámbito territorial de sus comunidades y pueblos indígenas y otras que voluntariamente se sometan a su conocimiento. Todas las decisiones tomadas en la resolución de un conflicto adquieren fuerza ejecutiva y deberán ser cumplidas.
- b. Competencia material:** La jurisdicción indígena tiene competencia para conocer todo tipo de conflictos que se susciten dentro de su ámbito territorial y que sean sometidos a su conocimiento o que tenga que conocer de oficio.



000038

Comisión De Pueblos Indígenas
Congreso De La República
Guatemala C.A.

- c. Competencia personal:** La jurisdicción indígena tiene competencia sobre las personas indígenas. También tiene competencia sobre las personas no indígenas que se encuentren dentro de su ámbito territorial que realicen hechos o actos que afecten derechos o comprometan bienes jurídicos indígenas.

Artículo 12. Excepción cultural. Se establece la excepción cultural como mecanismo de acción y de excepción procesal en todos los asuntos de competencia de la jurisdicción de las autoridades indígenas.

Artículo 13. Instancia única. Contra las decisiones emitidas por las autoridades indígenas tradicionales únicamente cabe la acción constitucional de amparo; la autoridad competente resolverá interpretando interculturalmente los hechos, el derecho y por reglas de equidad.

Artículo 14. Conflicto de competencia entre la jurisdicción indígena y el derecho ordinario. En los casos de conflicto de competencia entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria prevalece la jurisdicción indígena, siempre que se demuestre la filiación comunitaria indígena.

CAPITULO IV
RELACIONES DE COORDINACIÓN

Artículo 15. Peritajes. En los procedimientos de la jurisdicción ordinaria, el juez, para mejor decidir, podrá requerir la realización de informes periciales socio-antropológicos que ilustren sobre la cultura y el derecho indígena.



000039

Comisión De Pueblos Indígenas
Congreso De La República
Guatemala C.A.

Artículo 16. Relaciones de coordinación. Cuando las circunstancias lo requieran, las autoridades indígenas y las autoridades de la jurisdicción ordinaria deberán entablar mecanismo de coordinación.

Artículo 17. Reserva de la jurisdicción indígena. Los actos jurídicos y las decisiones tomadas por las autoridades indígenas no son revisables por la jurisdicción ordinaria.

La jurisdicción ordinaria no tiene competencia para recibir causas referidas a hechos y actos en conocimiento o fenecidos dentro del ámbito territorial indígena, debiendo, en todo caso, someterlas a conocimiento de la autoridad indígena que corresponda.

Artículo 18. Relación con autoridades administrativas y registrales. Las autoridades de la jurisdicción indígena deberán desarrollar relaciones de coordinación y colaboración con autoridades estatales. Las autoridades administrativas y de registros públicos acatarán y registrarán en los registros públicos las decisiones de la jurisdicción indígena cuando corresponda.

Artículo 19. Protección del derecho a la jurisdicción indígena. En caso de vulneración del derecho a la jurisdicción indígena, los afectados podrán interponer las acciones de garantías constitucionales o las acciones legales pertinentes a fin de que se respete el derecho, se establezcan las responsabilidades de ley y se restituyan los derechos conculcados.

Artículo 20. Coordinación con la Policía Nacional Civil y otros cuerpos de seguridad. En el ejercicio de sus funciones, la Policía Nacional Civil y otros cuerpos de seguridad deberán colaborar y coordinar con las autoridades



770040

Comisión De Pueblos Indígenas
Congreso De La República
Guatemala C.A.

indígenas, cualquier acción o instrucción que tengan que ejecutar en comunidades y pueblos indígenas.

Artículo 21. Coordinación con el Ministerio Público. En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público deberá colaborar y coordinar con las autoridades indígenas cualquier acción, instrucción o solicitud propia de su mandato como auxiliar de la administración de justicia que tenga que ejecutar en comunidades y pueblos indígenas.

CAPITULO V
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 22. Respeto y promoción para fortalecer la jurisdicción Indígena. Para el respeto y promoción del fortalecimiento de la jurisdicción indígena, el Estado deberá:

- a) Destinar fondos anuales para el mejoramiento y el equipamiento de las sedes de las autoridades tradicionales indígenas.
- b) Promover la enseñanza del derecho indígenas y las formas de organización de los pueblos indígenas en todo el sistema educativo nacional.
- c) Empezar acciones para la formación de operadores de justicia en materia de pluralismo jurídico y derechos indígenas. Las instituciones vinculadas a la administración de justicia deberán incorporar obligatoriamente materias referidas a este tema.

Artículo 23. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL ____ DE ____ DE DOS MIL TRECE.